

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veinticinco

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que el abogado don Juan Francisco Cleveland Mujica, en representación de don Juan Araya González, demandante en autos RIT T-200-2024, sobre sobre tutela laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, dedujo recurso de queja en contra de los ministros de una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, señora María Teresa Díaz Zamora, señor Edwin Danilo Quezada Rojas y señor Juan Ángel Muñoz López, quienes con fecha 10 de diciembre de 2024, confirmaron la resolución de primer grado que declaró la caducidad de los hechos ocurridos con anterioridad al 15 de mayo de 2024

Manifiesta con fecha 17 de agosto de 2024 se interpuso denuncia por vulneración de derechos ocurridos durante la relación laboral y con ocasión del despido, que los demandados se defendieron oponiendo una excepción de caducidad, fundada en que la mayoría de los hechos que sustentan la acción carecían de fecha y que el último habría ocurrido el 14 de mayo de 2024, de manera que todos se habrían verificado antes de los sesenta días que preceden de la interposición de la demanda, aún descontado el lapso que duró la instancia administrativa, que al evacuar el traslado conferido, su parte aclaró que se trata de una cadena de actos vulneratorios, por lo que el plazo respectivo debe computarse desde el último, que corresponde precisamente al despido del demandante, y que en audiencia preparatoria el tribunal acogió la excepción, por lo que declaró la caducidad de los hechos ocurridos con anterioridad al 15 de mayo de 2024.

Dicha decisión fue confirmada por los recurridos, quienes se limitaron a invocar los artículos 476 del Código del Trabajo y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin hacerse cargo de sus argumentos ni de la naturaleza de los actos denunciados, confundiendo el término previsto para el ejercicio de la acción, en el artículo 489 del Código del Trabajo, con su sustento fáctico.

Solicita se acoja el recurso y, por consiguiente, se deje sin efecto la resolución impugnada y se dicte en su reemplazo una que rechace la excepción.

**Segundo:** Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente dictaron la resolución impugnada, por compartir los fundamentos de la de primer grado, pues en su concepto, había transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 486 inciso final del Código del Trabajo, incluyendo la suspensión a que alude el artículo 168 del mismo estatuto, esto es, más 60 días hacia atrás desde la fecha de interposición de la demanda de autos, que data del 17 de agosto de 2024.



**Tercero:** Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, denominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su párrafo primero, intitulado de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

**Cuarto:** Que de estos antecedentes y de los que aparecen en el sistema computacional, correspondientes a la causa antes señalada, se desprenden los siguientes hechos:

a.- Con fecha 17 de agosto de 2024, don Juan Araya González interpuso demanda de tutela laboral, por vulneración de derechos fundamentales ocurridos durante la relación laboral y con ocasión del despido, afirmando que éste se produjo el 15 de mayo de 2024, por lo que tras hacer presente que dedujo un reclamo administrativo tramitado entre el 17 de mayo y el 5 de junio de 2024, solicita se declare la vulneración de derechos durante la relación laboral y con ocasión del despido, otorgándole las indemnizaciones previstas en el artículo 489 del Código del Trabajo, además de una por concepto de daño moral y de las restantes prestaciones laborales que indica.

b.- El tribunal dio curso a la demanda y los demandados, contestando conjuntamente, opusieron la excepción de caducidad que fue acogida en audiencia preparatoria de fecha 8 de noviembre de 2024, respecto de los hechos ocurridos con anterioridad al 15 de mayo de 2024.

c.- Decisión que apelada fue confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en virtud de sus mismos fundamentos.

**Quinto:** Que para resolver debe tenerse presente que el procedimiento de tutela laboral consagra dos tipos de acciones distintas, con sus correspondientes plazos de caducidad; es así que el artículo 486 del Código del Trabajo dispone que la denuncia fundada en vulneraciones ocurridas con relación laboral vigente “deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada” y su artículo 489 señala que tratándose de vulneraciones cometidas con ocasión del despido la denuncia “denuncia deberá interponerse dentro del plazo de sesenta días contado desde la separación”.

En el caso, si bien el demandante relata hechos vulneratorios ocurridos durante la vigencia del contrato, no cabe duda que al afirmar que fue despedido y solicitar las indemnizaciones que prevé el segundo de los artículos antes



mencionados, nos encontramos frente a ese tipo de acción, lo que determina que sea el segundo plazo, y no el primero, el que deba considerarse a efectos de la caducidad, mismo que no se completó en la especie.

**Sexto:** Que, en consecuencia, los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso al aplicar el término de prescripción previsto en el artículo 486 del Código del Trabajo a una situación regida por el artículo 489 de dicho cuerpo legal; sin perjuicio de precisar que la caducidad es una sanción que afecta a la acción, cuando es ejercida en forma extemporánea, pero, jamás a los hechos que le sirven de fundamento.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge** el recurso de queja deducido en contra de los ministros de una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, señora María Teresa Díaz Zamora, señor Edwin Danilo Quezada Rojas y señor Juan Ángel Muñoz López, por haber dictado con falta o abuso la resolución de diez de diciembre de último, y, en consecuencia, **se dejan sin efecto** la referida resolución de segundo grado y la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel con fecha 8 de noviembre julio de 2024, y, en su lugar, se rechaza la excepción y se ordena dar curso progresivo a los autos.

No se ordena pasar estos antecedentes al Tribunal Pleno, por no existir mérito suficiente para ello.

Regístrese y devuélvase.

N° 60.694-24.-





XMVRXSMMXXK

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

